

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

**APROBACIÓN DEL CONVENIO SOBRE ACUERDOS
DE ELECCIÓN DE FORO**

EXPEDIENTE N°. 25.382

DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO
25 de junio del 2026

PRIMERA LEGISLATURA
(Del 1° de mayo de 2026 al 30 de abril de 2027)

PRIMER PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS

DEPARTAMENTO DE COMISIONES

Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior

Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior

DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO

APROBACIÓN DEL CONVENIO SOBRE ACUERDOS DE ELECCIÓN DE FORO EXPEDIENTE N.º 25.382

Los suscritos Diputados miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, rendimos DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO del proyecto de ley expediente N.º 25.382 "APROBACIÓN DEL CONVENIO SOBRE ACUERDOS DE ELECCIÓN DE FORO." iniciado el 26 de enero del 2026, publicado en la Gaceta N.º 25, alcance N.º 13 del 06 de febrero del 2026, iniciativa del Poder Ejecutivo, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1. Resumen del proyecto de ley

El proyecto de ley propone la aprobación del **Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro**, suscrito en La Haya el treinta de junio de dos mil veinticinco.

Este convenio internacional representa un paso hacia adelante en la cooperación jurisdiccional internacional, en el sentido que viene a establecer normas procesales, de aplicación obligatoria entre las partes contratantes y entre los Estados Parte, aplicables a los acuerdos exclusivos de elección de foro en materia civil y comercial internacional. En este mismo sentido se fomenta la autonomía de la voluntad como principio general de Derecho privado, al permitir a las partes, ponerse de acuerdo y designar una sede exclusiva para resolver cualquier controversia que pueda surgir, producto de una relación civil o comercial internacional.

También pretende garantizar la eficacia de los acuerdos y vendría a facilitar el reconocimiento y ejecución internacional de las resoluciones emitidas por los tribunales correspondientes.

Cabe resaltar que este acuerdo versa sobre reglas de materia enteramente procesal que pretenden unificar y brindar la seguridad jurídica correspondiente a los acuerdos de elección de foro de las partes contratantes.

En síntesis, el convenio viene a establecer tres grandes ejes:

- Con la elección de foro, obliga al tribunal elegido a conocer del litigio.
- Como consecuencia del primero, obliga a otros tribunales a inhibirse de conocer el mismo asunto, evitando las duplicidades y posibles sentencias contradictorias.
- Por último, viene a facilitar el reconocimiento y la ejecución de las sentencias dictadas en los foros elegidos por las partes.

2. Sobre la tramitación del proyecto de ley

- El 26 de enero del 2026 se presenta el proyecto de ley.
- Se publica en La Gaceta N°. 25 del 06 de febrero del 2026.
- El 18 de febrero del 2026 ingresó al orden del día de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior.

El Proyecto al momento de la redacción de este dictamen cuenta con el informe AL-DEST- IJU -141-2026 del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.

- El expediente fue consultado en la sesión ordinaria N° 15 de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior del 18 de febrero del 2026 a las siguientes instituciones:

1. Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
2. Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
3. Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).
4. Ministerio de Justicia y Paz.
5. Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
6. Procuraduría General de la República.
7. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
8. Corte Suprema de Justicia
9. Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

- Que este expediente se vota el informe de forma unánime afirmativo el 25 de junio del 2026.

3. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY

El instrumento busca resolver uno de los principales problemas del comercio internacional: la incertidumbre sobre cuál tribunal debe conocer un conflicto cuando las partes pertenecen a distintos países.

Actualmente puede ocurrir que:

- Varias jurisdicciones se declaren competentes.
- Se generen procesos paralelos.
- Existan sentencias contradictorias.
- Se dificulte la ejecución internacional de las resoluciones.

El Convenio procura que prevalezca la voluntad de las partes expresada en el contrato.

4. DEL PROCESO DE CONSULTA

A continuación se brinda un resumen de los criterios esbozados por cada una de las instituciones u organizaciones que rindieron respuesta a la consulta efectuada por la comisión respecto al proyecto de Ley N° 25.382.

ENTE CONSULTADO	RESPUESTA
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.	Mediante OFICIO N°: DJC-INT-017-26, se indica lo siguiente. La suscripción de este instrumento fortalece la seguridad jurídica en el comercio internacional, al garantizar la eficacia de los acuerdos de elección de foro, y se enmarca en la visión del Estado costarricense de armonizar el derecho internacional privado y promover un entorno favorable para la inversión y las relaciones

jurídicas transfronterizas.

Además, desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado, puede afirmarse que la adhesión de Costa Rica, lo posiciona como un destino más seguro para la inversión extranjera y mejora la previsibilidad en la resolución de litigios internacionales. Para Costa Rica, fiel a su tradición de apertura comercial y respeto al derecho internacional privado, la incorporación del Convenio consolida un entorno jurídico más estable y competitivo, reduce el riesgo de litigios paralelos y proyecta al país como una jurisdicción confiable y alineada con los estándares contemporáneos de cooperación judicial internacional.

Por último, desde esta cartera se desea dejar constancia de la importancia de su aprobación, al contribuir y sumar competitividad al país frente a jurisdicciones que ya garantizan el reconocimiento expreso de los acuerdos de foro exclusivo; y confirmar el firme compromiso de Costa Rica con los principios de seguridad jurídica, buena fe contractual y cooperación jurisdiccional internacional, según lo indicado supra y detallado en la exposición de motivos.

Corolario de lo expuesto, y en virtud de haberse concluido la etapa de revisión técnico-política y de negociación del texto del Tratado, la Dirección Jurídica del MREC procedió al examen integral de su contenido, sin que se identificara impedimento jurídico alguno que obstaculice la continuación de su trámite para eventual aprobación legislativa, decisión que corresponde al ámbito de discrecionalidad propia de la Asamblea Legislativa. Desde la perspectiva de esta Cartera, dicha aprobación resulta jurídicamente viable y

	conveniente, por cuanto el instrumento es compatible con el ordenamiento jurídico nacional y se inscribe en la práctica habitual del Estado costarricense para el tratamiento de este tipo de acuerdos internacionales.
Promotora de Comercio Exterior	Mediante oficio N° PROCOMER-GG-EXT-070-2026 se indicó lo siguiente La aprobación de este convenio internacional supone un paso en la dirección correcta para brindar seguridad jurídica a las partes involucradas en transacciones internacionales en materia civil y comercial. Lo anterior por cuanto, dicho instrumento pretende facilitar la cooperación judicial internacional, por medio de la adopción de reglas claras y uniformes relacionadas con la competencia judicial y el reconocimiento de sentencias en las materias antes indicadas. En virtud de lo anterior, esta Promotora apoya la aprobación de esta convención internacional, pues es un instrumento jurídico que favorece la atracción de inversiones hacia nuestro país.
Corte Suprema de Justicia	Mediante oficio N° SP-47-2026 indicaron lo siguiente Lo anterior, dice la Dirección Jurídica, implica que debe analizarse cada elemento del acuerdo exclusivo de elección al foro, tomando en cuenta la normativa del estado que emitió la resolución para valorar si existen motivos para denegar la aplicación de la resolución, y en caso de que sea válida, proceder con la aplicación de dicha resolución conforme a la normativa del Poder Judicial. Todo lo cual modifica sustancialmente las funciones de los jueces civiles, porque las 2 materias que conocerían sería civil y comercial, que tendrán que ejecutar dichas resoluciones.

	Sin perjuicio de esas razones, es decir, no es que el proyecto tenga ninguna mala intención, pero sin perjuicio de esas razones, es importante establecer que el convenio obliga a que tribunales costarricenses conozcan de materia que normalmente se tramitaría en otra sede, no en sede costarricense. Eso es un incremento, implicaría un incremento en las tareas de conocimiento en los procesos que podrían ser conocidos por los tribunales costarricenses sin que se prevea ningún presupuesto adicional para el Poder Judicial. Claramente, para la implementación del convenio resultaría necesario dotar del presupuesto requerido a fin de preparar logística y administrativamente la entrada en vigor de una ley que amplía las competencias jurisdiccionales en el conocimiento de procesos civiles y comerciales de orden internacional, ello en aras de dar cumplimiento a los fines expuestos en el exordio del proyecto. En ese sentido, aunque el proyecto de ley considera la existencia de un andamiaje procesal moderno costarricense que facilita la adopción del convenio, las posibilidades de asumir más cargas competenciales en la jurisdicción civil y comercial pasa, como es un hecho notorio, por la adecuada dotación de recursos financieros. Incentivar la inversión extranjera directa, dado el peso determinante de empresas internacionales a la previsibilidad del régimen jurídico aplicable a la solución de controversias contractuales. En ese sentido, el reconocimiento automático de acuerdos de elección de foro favorece directamente un clima de negocios competitivo y
--	---

	confiable. Incentivar la inversión extranjera directa, dado el peso determinante de empresas internacionales a la previsibilidad del régimen jurídico aplicable a la solución de controversias contractuales. En ese sentido, el reconocimiento automático de acuerdos de elección de foro favorece directamente un clima de negocios competitivo y confiable.
--	--

5. AUDIENCIAS

No hay audiencias para este expediente.

6. INFORME SERVICIOS TÉCNICOS

Mediante el informe AL-DEST-IJU-261-2023 del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, se emitió criterio sobre el expediente 23.858.

7. Consideraciones finales

Analizado por el fondo el texto del proyecto de Ley N° 25.382, así como las respuestas obtenidas de las instituciones consultadas durante la tramitación del expediente, se exponen las siguientes valoraciones.

1. *De conformidad con el inciso 4 del artículo 121 de la Constitución Política, es de resorte exclusivo de la Asamblea Legislativa la aprobación de los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos, como una de las atribuciones propias de estos cuerpos colegiados.*
2. Que mediante la firma del Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro el pasado 30 de junio de 2025, en una actividad celebrada en la

sede de la Conferencia de La Haya, Costa Rica reafirmó nuevamente su compromiso con la cooperación internacional.

3. En materia de Derecho Internacional, existen situaciones en que varios Estados, en virtud de su propia legislación interna, resultan competentes para conocer de un mismo asunto. Este fenómeno es conocido como conflicto internacional de competencia judicial positiva. Este tipo de situaciones derivadas de la competencia jurisdiccional, pueden ser dirimidas mediante la aplicación de Tratados Internacionales.
4. En la misma línea de ideas, el Código de Derecho Internacional Privado, mejor conocido como Código Bustamante, el cual fue sancionado mediante el decreto N° 50 referido como ley de la República y que está próxima a cumplir 100 años, merece una análisis con motivo de la redacción de este informe.

Artículo 318. Será en primer término juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquel a quien los litigantes se sometan expresa o tácitamente, siempre que uno de ellos por lo menos sea nacional del Estado contratante a que el juez pertenezca o tenga en él su domicilio y salvo el derecho local contrario. La sumisión no será posible para las acciones reales o mixtas sobre bienes inmuebles, si la prohíbe la ley de su situación.

Artículo 321. Se entenderá por sumisión expresa la hecha por los interesados renunciando clara y terminantemente a su fuero propio y designando con toda precisión el juez a quien se sometan

Como se puede apreciar, de las normas supra citadas se desprende a todas luces que la elección de foro es una figura que ya existe en el Derecho Internacional y que goza de un reconocimiento relacionado a la autonomía de la voluntad de las partes.

5. En temas de legislación interna, la ley N° 9342 “Código Procesal Civil” contiene una serie de normativas que regulan qué situaciones deben ser conocidas por la jurisdicción costarricense y que también resultan de importancia para este informe las siguientes.

ARTÍCULO 11.- Competencia internacional

11.1 Competencia del tribunal costarricense. Son competentes los tribunales costarricenses cuando así lo determinen los tratados internacionales vigentes. Además, lo serán si:

- El demandado, cualquiera que sea su nacionalidad, estuviera domiciliado en Costa Rica. Se presume domiciliada en Costa Rica la persona jurídica extranjera que tuviera en el país agencia, filial o sucursal, pero solo respecto de los actos o contratos celebrados por ellas.
- La obligación debe ser cumplida en Costa Rica.
- La pretensión se funda en un hecho, acto o negocio jurídico ocurrido, celebrado o con efectos en el territorio nacional.
- Las partes así lo han establecido contractualmente, siempre que alguna de ellas sea costarricense y al mismo tiempo exista algún criterio de conexión con el territorio nacional.

11.2 Competencia exclusiva. Son competentes los tribunales costarricenses, con exclusión de cualquier otro, para conocer de las siguientes pretensiones:

- Reales o mixtas relativas a muebles e inmuebles situados en Costa Rica.
- Contra personas jurídicas inscritas en Costa Rica que afecten su constitución, validez, disolución o sean relativas a decisiones o acuerdos de sus órganos.
- Cuando las partes sean costarricenses o extranjeros domiciliados en el país, siempre que sus efectos y ejecución deban darse en Costa Rica.

11.3 Incompetencia internacional. Los tribunales costarricenses deberán declararse incompetentes de oficio cuando:

- Se haya formulado demanda o solicitado ejecución respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad conforme a las normas del derecho internacional.
- En virtud de tratados o convenios internacionales, el asunto se encuentre atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado.

- El asunto no le sea atribuido de acuerdo con las disposiciones establecidas en este artículo. No obstante, a pesar de la inexistencia del factor de conexión, si el tribunal no declinó de oficio su competencia, el demandado podrá prorrogarla tácita o expresamente.

ARTÍCULO 98.- Normativa aplicable

Tratándose de cooperación judicial internacional se aplicarán las disposiciones de los tratados y los convenios internacionales vigentes y en su ausencia la normativa nacional. En ningún caso se aplicará de oficio el derecho extranjero, salvo si las partes fundan su derecho en una ley extranjera y acreditan legalmente su existencia, vigencia, contenido e interpretación. Cuando sea aplicable, el derecho extranjero deberá interpretarse como lo harían los tribunales del Estado a cuyo orden jurídico pertenece. Solo se podrán declarar inaplicables los preceptos de la ley extranjera, cuando estos contraríen manifiestamente los principios esenciales del orden público internacional en los que el Estado asienta su individualidad jurídica. Los procesos, cualquiera que sea su naturaleza, se sujetarán al ordenamiento nacional.

6. El instrumento firmado por nuestro país, regula de manera mucho más amplia y con criterio de especialidad, la figura de la elección de foro. Considera esta subcomisión, que es de vital importancia al fortalecer la seguridad jurídica en transacciones comerciales internacionales, permitiendo que los acuerdos de jurisdicción pactados por las partes sean respetados por los tribunales de los Estados parte y se enmarca en la visión del Estado costarricense de armonizar el derecho internacional privado y promover un entorno favorable para la inversión y las relaciones jurídicas transfronterizas
7. Del mismo modo, el acuerdo fortalece el principio de la autonomía de la voluntad, al facultar al tribunal elegido a dirimir el litigio, ordenando también inhibir al resto de tribunales no designados de pronunciarse sobre un mismo caso. Derivado de lo anterior, se facilita el reconocimiento y la ejecución de las sentencias dictadas con el propósito de evitar la duplicidad de litigios conjuntamente con posibles decisiones contradictorias.
8. Finalmente, considera que la decisión de aprobar este Tratado Internacional contribuirá con el favorecimiento y la apertura comercial, proyectando al país como una jurisdicción confiable y

sólida, en armonía con los últimos estándares de cooperación judicial internacional.

Dados los criterios de índole técnico, las consultas y consideraciones de oportunidad y conveniencia, los miembros de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, que suscriben este dictamen consideran que el proyecto es procedente y necesario para los ciudadanos de Costa Rica.

8. CONCLUSIÓN

En cuanto al presente Convenio sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa, se desprende que su objetivo principal es dotar de eficacia jurídica a los acuerdos exclusivos de elección de foro, así como garantizar el reconocimiento y ejecución internacional de las resoluciones dictadas por el tribunal designado.

Este tipo de Convenios son instrumentos jurídicos que brindan seguridad jurídica al comercio y la inversión internacional, creando un clima que propicia o favorece el flujo del comercio y los negocios internacionales, posicionando al país con los estándares mundiales más adecuados en la materia.

No se advierten incompatibilidades sustanciales entre el contenido del Convenio y el ordenamiento jurídico costarricense, en tanto se preservan principios fundamentales como el debido proceso, el orden público internacional y la soberanía jurisdiccional del Estado, especialmente a través de las causales de denegación del reconocimiento y ejecución previstas en el propio instrumento.

Por otra parte, las modificaciones o enmiendas que a futuro se autorizan dentro del cuerpo del Acuerdo y que en otras ocasiones fueron cuestionadas, son acuerdos de menor rango cuyo sustento se encuentra en el artículo 121 párrafo tercero del inciso 4) constitucional.

“No requerirán aprobación legislativa los protocolos de menor rango, derivados de tratados públicos o convenios internacionales aprobados por la Asamblea, cuando estos instrumentos autoricen de modo expreso tal derivación.”

En términos generales, el instrumento contribuye de manera directa a la seguridad jurídica, la previsibilidad en las relaciones comerciales internacionales y la cooperación judicial entre los Estados parte.

En virtud de lo anterior, no se observan problemas de constitucionalidad o legalidad, por lo que su aprobación constituye un asunto de discrecionalidad política de la Asamblea Legislativa.

9. RECOMENDACIÓN

De conformidad con lo expuesto anteriormente los integrantes miembros de esta comisión rendimos DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO y se recomienda al pleno de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, el dictamen afirmativo sobre el proyecto N° 25.382 denominado APROBACIÓN DEL CONVENIO SOBRE ACUERDOS DE ELECCIÓN DE FORO.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

APROBACIÓN DEL CONVENIO SOBRE ACUERDOS DE ELECCIÓN DE FORO

ARTÍCULO ÚNICO- Apruébese, en cada una de sus partes, el “CONVENIO SOBRE ACUERDOS DE ELECCIÓN DE FORO”, adoptado en la ciudad de La Haya, el 30 de junio del 2005 cuyo texto es el siguiente:

Convenio ¹ sobre Acuerdos de Elección de Foro²
(hecho el 30 de junio de 2005)³

Los Estados parte del presente Convenio,
Deseosos de promover el comercio y las inversiones internacionales mediante el fortalecimiento de la cooperación judicial,
Convencidos que tal cooperación puede ser fortalecida por medio de reglas uniformes sobre competencia y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en materia civil o comercial,
Convencidos que dicha cooperación fortalecida requiere, en particular, un régimen jurídico internacional que proporcione seguridad y asegure la eficacia de los acuerdos exclusivos de elección de foro entre las partes en operaciones comerciales y que regule el reconocimiento y la ejecución de resoluciones dictadas en los procedimientos basados en dichos acuerdos,
Han resuelto celebrar el presente Convenio y han adoptado las disposiciones siguientes:

CAPÍTULO I – ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1 Ámbito de aplicación

1. El presente Convenio se aplicará en situaciones internacionales a los acuerdos exclusivos de elección de foro que se celebren en materia civil y comercial.
2. A los efectos del Capítulo II, una situación es internacional salvo que las partes sean residentes en el mismo Estado contratante y la relación entre éstas y todos los demás elementos relevantes del litigio, cualquiera que sea el lugar del tribunal elegido, estén conectados únicamente con ese Estado.
3. A los efectos del Capítulo III, una situación es internacional cuando se solicite el reconocimiento o la ejecución de una resolución extranjera.

Artículo 2 Exclusiones del ámbito de aplicación

1. El presente Convenio no se aplicará a los acuerdos exclusivos de elección de foro:
 - a) en que es parte una persona física actuando primordialmente por razones personales, familiares o domésticas (un consumidor);
 - b) relativos a los contratos de trabajo, incluyendo los convenios colectivos.
2. El presente Convenio no se aplicará a las siguientes materias:
 - a) el estado y la capacidad legal de las personas físicas;
 - b) las obligaciones alimenticias;
 - c) las demás materias de Derecho de familia, incluyendo los regímenes matrimoniales y otros derechos u obligaciones resultantes del matrimonio o de relaciones similares;
 - d) los testamentos y las sucesiones;
 - e) la insolvencia, los convenios entre insolvente y acreedores y materias análogas;
 - f) el transporte de pasajeros y de mercaderías;
 - g) la contaminación marina, la limitación de responsabilidad por demandas en materia marítima, las averías gruesas, así como el remolque y salvamento marítimos en caso de emergencia;
 - h) los obstáculos a la competencia;
 - i) la responsabilidad por daños nucleares;
 - j) las demandas por daños corporales y morales relacionados con los primeros, interpuestas por personas físicas o en nombre de éstas;
 - k) las demandas de responsabilidad extracontractual por daños a los bienes tangibles

¹ Se utiliza el término "Convenio" como sinónimo de "Convención".

² Este Convenio, así como la documentación correspondiente, se encuentra disponible en el sitio web de la

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (www.hcch.net), bajo el rubro "Convenios" o bajo

la "Sección Elección de Foro". Para obtener el historial completo del Convenio, véase Hague Conference on

Private International Law, *Proceedings of the Twentieth Session (2005)*, Tome III, *Choice of Court* (ISBN

978-9-40000-053-7, Intersentia, Antwerp, 2010, 871 pp.).

³ No entrado en vigor. Sobre el estado del Convenio, <http://www.hcch.net>.

causados por actos ilícitos;

l) los derechos reales inmobiliarios y el arrendamiento de inmuebles;

m) la validez, la nulidad o la disolución de personas morales y la validez de las decisiones de sus órganos;

n) la validez de los derechos de propiedad intelectual distintos de los derechos de autor y derechos conexos;

o) la infracción de los derechos de propiedad intelectual distintos de los derechos de autor y derechos conexos, con excepción de los litigios iniciados por la violación de un contrato existente entre las partes con relación a tales derechos, o los que pudieran haberse iniciado por la infracción de dicho contrato;

p) la validez de las inscripciones en los registros públicos.

3. No obstante lo establecido en el apartado 2, un litigio no quedará excluido del ámbito de aplicación del presente Convenio si una de las materias excluidas en virtud de dicho apartado, surgiera únicamente como cuestión preliminar y no como cuestión principal. En particular, el sólo hecho que una materia excluida en virtud del apartado 2 se suscite como defensa, no excluirá la aplicación de este Convenio a un litigio, si dicha materia no constituye cuestión principal de éste.

4. El presente Convenio no se aplicará al arbitraje ni a los procedimientos relacionados con el mismo.

5. Un litigio no quedará excluido del ámbito de aplicación del presente Convenio por el sólo hecho de que un Estado, incluyendo un gobierno, una agencia gubernamental o cualquier persona actuando en representación de un Estado, sea parte en el litigio.

6. El presente Convenio no afectará los privilegios e inmunidades de los Estados o de las organizaciones internacionales, con respecto a ellas mismas o a sus propiedades.

Artículo 3 Acuerdos exclusivos de elección de foro

A los efectos del presente Convenio:

a) "acuerdo exclusivo de elección de foro" significa un acuerdo celebrado por dos o más partes que cumple con los requisitos establecidos por el apartado c) y que designa, con el objeto de conocer de los litigios que hayan surgido o pudieran surgir respecto a una relación jurídica concreta, a los tribunales de un Estado contratante o a uno o más tribunales específicos de un Estado contratante, excluyendo la competencia de cualquier otro tribunal;

b) un acuerdo de elección de foro que designe a los tribunales de un Estado contratante o uno o más tribunales específicos de un Estado contratante se reputará exclusivo, salvo que las partes hayan dispuesto expresamente lo contrario;

c) un acuerdo exclusivo de elección de foro debe ser celebrado o documentado:

i) por escrito; o

ii) por cualquier otro medio de comunicación que pueda hacer accesible la información para su ulterior consulta;

d) un acuerdo exclusivo de elección de foro que forme parte de un contrato, será considerado un acuerdo independiente de las demás cláusulas del mismo. La validez del acuerdo exclusivo de elección de foro no podrá ser impugnada por la sola razón de que el contrato no es válido

Artículo 4 Otras definiciones

1. A los efectos del presente Convenio, el término "resolución" significa toda decisión en cuanto al fondo emitida por un tribunal, cualquiera que sea su denominación, incluyendo sentencias o autos, así como la determinación de costas o gastos por el tribunal (incluyendo el secretario del tribunal), siempre que la determinación se refiera a una decisión sobre el fondo que sea susceptible de ser reconocida o ejecutada en virtud de este Convenio. Las medidas provisionales y cautelares no son resoluciones.

2. A los efectos del presente Convenio, se entenderá que una entidad o persona que no sea persona física, tiene su residencia en el Estado:

- a) de su sede estatutaria;
- b) bajo cuya ley se haya constituido;
- c) de su administración central; o
- d) de su establecimiento principal.

CAPÍTULO II – COMPETENCIA JUDICIAL

Artículo 5 Competencia del tribunal elegido

1. El tribunal o los tribunales de un Estado contratante designados en un acuerdo exclusivo de elección de foro, serán competentes para conocer de un litigio al que se aplique dicho acuerdo, salvo que el acuerdo sea nulo según la ley de ese Estado.
2. El tribunal competente en virtud del apartado 1 no declinará el ejercicio de su competencia fundándose en que el tribunal de otro Estado debería conocer del litigio.
3. Los apartados precedentes no afectarán a las normas sobre:
 - a) la competencia material o la cuantía de la reclamación;
 - b) el reparto interno de competencias entre los tribunales de un Estado contratante. Sin embargo, cuando el tribunal elegido tenga poder discrecional para transferir el asunto, deberá darse especial consideración a la elección de las partes.

Artículo 6 Obligaciones de un tribunal no elegido

Cualquier tribunal de un Estado contratante distinto del Estado del tribunal elegido, suspenderá el procedimiento o rechazará la demanda cuando se le presente un litigio al que se le aplique un acuerdo exclusivo de elección de foro, salvo que:

- a) el acuerdo sea nulo en virtud de la ley del Estado donde se encuentra el tribunal elegido;
- b) una de las partes careciera de la capacidad para celebrar el acuerdo en virtud de la ley del tribunal al que se ha acudido;
- c) dar efecto al acuerdo conduciría a una manifiesta injusticia o sería manifiestamente contrario al orden público del Estado del tribunal al que se ha acudido;
- d) por causas excepcionales fuera del control de las partes, el acuerdo no pueda ser razonablemente ejecutado; o
- e) el tribunal elegido haya resuelto no conocer del litigio.

Artículo 7 Medidas provisionales y cautelares

Las medidas provisionales y cautelares no se rigen por el presente Convenio. Este Convenio no exige ni impide la concesión, denegación o el levantamiento de medidas provisionales y cautelares por un tribunal de un Estado contratante. El Convenio no afecta la posibilidad para una de las partes de solicitar dichas medidas, ni la facultad de un tribunal de concederlas, denegarlas o levantarlas.

CAPÍTULO III – RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN

Artículo 8 Reconocimiento y ejecución

1. Una resolución dictada por un tribunal de un Estado contratante que haya sido designado en un acuerdo exclusivo de elección de foro, será reconocida y ejecutada en los demás Estados contratantes conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo. El reconocimiento o la ejecución sólo podrá denegarse por las causas establecidas en el presente Convenio.
2. Sin perjuicio de lo que sea necesario para la aplicación de las disposiciones del presente Capítulo, no se procederá a revisión alguna en cuanto al fondo de la resolución dictada por el tribunal de origen. El tribunal requerido estará vinculado por las constataciones de hecho en que el tribunal de origen hubiere basado su competencia, salvo que la resolución hubiere sido dictada en rebeldía.
3. Una resolución será reconocida sólo si produce efectos en el Estado de origen y deberá ser ejecutada sólo si es ejecutoria en el Estado de origen.
4. El reconocimiento o la ejecución podrán ser pospuestos o denegados si la resolución es objeto de un recurso en el Estado de origen o si el plazo para interponer un recurso ordinario no hubiese expirado. El rechazo no impedirá una solicitud ulterior de reconocimiento o ejecución de la resolución.
5. El presente artículo se aplicará también a una resolución dictada por el tribunal de un Estado contratante como consecuencia de haberle sido transferido el asunto por el tribunal elegido en dicho

Estado contratante, tal como lo permite el artículo 5, apartado 3. Sin embargo, cuando el tribunal elegido tenía poder discrecional para transferir el asunto a otro tribunal, podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución de una resolución contra una parte que se opuso a la transferencia en tiempo oportuno en el Estado de origen.

Artículo 9 Denegación del reconocimiento o de la ejecución

El reconocimiento o la ejecución podrán denegarse si:

- a) el acuerdo era nulo en virtud de la ley del Estado del tribunal elegido, salvo que el mismo tribunal haya constatado que el acuerdo es válido;
- b) una de las partes carecía de la capacidad para celebrar el acuerdo en virtud de la ley del Estado requerido;
- c) el documento con el que se inició el procedimiento u otro documento equivalente, que contenga los elementos esenciales de la demanda,
 - i) no fue notificado al demandado con tiempo suficiente y de forma tal que le permitiera preparar su defensa, salvo que el demandado haya comparecido ante el tribunal de origen para proceder a su defensa sin impugnar la notificación, siempre que la ley del Estado de origen permita que las notificaciones sean impugnadas; o
 - ii) fue notificado al demandado en el Estado requerido de manera incompatible con los principios fundamentales sobre notificación de documentos de ese Estado;
- d) la resolución es consecuencia de un fraude en relación al procedimiento;
- e) el reconocimiento o la ejecución fueren manifiestamente contrarios al orden público del Estado requerido, en particular, si el procedimiento concreto que condujo a la resolución fue incompatible con los principios fundamentales de equidad procesal de ese Estado;
- f) la resolución es incompatible con otra resolución dictada en el Estado requerido en un litigio entre las mismas partes; o
- g) la resolución es incompatible con una resolución previamente dictada en otro Estado en un litigio entre las mismas partes con el mismo objeto y la misma causa, siempre que la resolución previamente dictada cumpla con las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado requerido.

Artículo 10 Cuestiones preliminares

1. Cuando una de las materias excluidas en virtud del artículo 2, apartado 2, o en virtud del artículo 21, haya surgido como una cuestión preliminar, la determinación sobre la misma no será reconocida o ejecutada en virtud del presente Convenio.
2. El reconocimiento o la ejecución de una resolución podrá denegarse si, y en la medida que, dicha resolución se haya fundamentado en una determinación sobre una materia excluida en virtud del artículo 2, apartado 2.
3. Sin embargo, en el caso de una determinación sobre la validez de un derecho de propiedad intelectual distinto del derecho de autor o de un derecho conexo, el reconocimiento o la ejecución de una resolución podrá denegarse o posponerse en virtud del apartado anterior sólo si:
 - a) la determinación es incompatible con una resolución o una decisión de una autoridad competente en dicha materia en el Estado bajo cuya ley se originó el derecho de propiedad intelectual; o
 - b) se encuentra pendiente un procedimiento relativo a la validez del derecho de propiedad intelectual en dicho Estado.
4. El reconocimiento o la ejecución de una resolución podrá denegarse si, y en la medida que, la resolución se fundamente en una determinación sobre una materia excluida en virtud de una declaración hecha por el Estado requerido de acuerdo con el artículo 21.

Artículo 11 Daños y perjuicios

1. El reconocimiento o la ejecución de una resolución podrá denegarse si, y en la medida que, la resolución conceda daños y perjuicios, incluyendo daños y perjuicios ejemplares o punitivos, que no reparen a una parte por la pérdida o el perjuicio real sufrido.
2. El tribunal requerido tomará en consideración si, y en qué medida, los daños y perjuicios fijados por el tribunal de origen sirven para cubrir costas y gastos relacionados con el procedimiento.

Artículo 12 Transacciones judiciales

Las transacciones judiciales que ha aprobado un tribunal de un Estado contratante, designado en un acuerdo exclusivo de elección de foro o que han sido celebradas ante ese tribunal en el curso del procedimiento y que son ejecutorias al igual que una resolución en el Estado de origen, serán ejecutadas en virtud del presente Convenio de igual manera que una resolución.

Artículo 13 Documentos a presentar

1. La parte que invoque el reconocimiento o solicite la ejecución deberá presentar:

- a) una copia completa y certificada de la resolución;
- b) el acuerdo exclusivo de elección de foro, una copia certificada del mismo, o prueba de su existencia;
- c) si la resolución fue dictada en rebeldía, el original o una copia certificada del documento que acredite que el documento por el que se inició el procedimiento o un documento equivalente fue notificado a la parte no compareciente;
- d) cualquier documento necesario para establecer que la resolución produce efectos o, en su caso, es ejecutoria en el Estado de origen;
- e) en el caso previsto en el artículo 12, una certificación de un tribunal del Estado de origen haciendo constar que la transacción judicial o una parte de ella es ejecutoria de igual manera que una resolución en el Estado de origen.

2. Si el contenido de la resolución no permitiera al tribunal requerido constatar si se han cumplido las condiciones previstas en el presente Capítulo, dicho tribunal podrá solicitar cualquier documentación necesaria.

3. La solicitud de reconocimiento o de ejecución podrá acompañarse por un documento, emitido por un tribunal (incluyendo una persona autorizada del tribunal) del Estado de origen, conforme al formulario modelo recomendado y publicado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

4. Si los documentos a que se refiere el presente artículo no constan en un idioma oficial del Estado requerido, éstos deberán acompañarse por una traducción certificada a un idioma oficial, salvo que la ley del Estado requerido disponga algo distinto.

Artículo 14 Procedimiento

El procedimiento para el reconocimiento, la declaración de ejecutoriedad o el registro para la ejecución, así como la ejecución de la resolución, se regirán por la ley del Estado requerido, salvo que el presente Convenio disponga algo distinto. El tribunal requerido actuará con celeridad.

Artículo 15 Divisibilidad

El reconocimiento o la ejecución de una parte separable de la resolución se concederá si se solicita el reconocimiento o la ejecución de dicha parte o si solamente parte de la resolución es susceptible de ser reconocida o ejecutada en virtud del presente Convenio.

CAPÍTULO IV – CLÁUSULAS GENERALES

Artículo 16 Disposiciones transitorias

- 1. El presente Convenio se aplicará a los acuerdos exclusivos de elección de foro celebrados después de su entrada en vigor en el Estado del tribunal elegido.
- 2. El presente Convenio no se aplicará a los procedimientos iniciados antes de su entrada en vigor en el Estado del tribunal al que se ha acudido.

Artículo 17 Contratos de seguro y reaseguro

- 1. Un litigio relativo a un contrato de seguro o reaseguro, no se encuentra excluido del ámbito de aplicación del presente Convenio en razón de que dicho contrato de seguro o reaseguro se refiera a una materia a la que este Convenio no es aplicable.
- 2. El reconocimiento y la ejecución de una resolución relativa a la responsabilidad en virtud de un contrato de seguro o reaseguro no podrá limitarse o denegarse en razón de que la responsabilidad en virtud del dicho contrato incluya la indemnización del asegurado o reasegurado con respecto a:
 - a) una materia a la que el presente Convenio no es aplicable; o
 - b) una decisión que otorga daños y perjuicios a los que podría aplicarse el artículo 11.

Artículo 18 Exención de legalización

Todos los documentos transmitidos o entregados en virtud del presente Convenio estarán exentos de legalización o cualquier otra formalidad análoga, incluyendo la Apostilla.

Artículo 19 Declaraciones limitando la competencia

Un Estado podrá declarar que sus tribunales podrán negarse a decidir sobre un litigio al que se aplica un acuerdo exclusivo de elección de foro si, con excepción del lugar de situación del tribunal elegido, no existe vínculo alguno entre ese Estado y las partes o el litigio.

Artículo 20 Declaraciones limitando el reconocimiento y la ejecución

Un Estado podrá declarar que sus tribunales podrán negarse a reconocer o ejecutar una resolución dictada por un tribunal de otro Estado contratante si las partes tenían su residencia en el Estado requerido y la relación entre las partes, así como todos los demás elementos relevantes del litigio, con excepción del lugar del tribunal elegido, estaban conectados solamente con el Estado requerido.

Artículo 21 Declaraciones con respecto a materias específicas

1. Cuando un Estado tenga un interés importante para no aplicar el presente Convenio a una materia específica, dicho Estado podrá declarar que no aplicará este Convenio a dicha materia. El Estado que haga dicha declaración deberá asegurar que tal declaración no será más amplia de lo necesario y que la materia específica excluida se encontrará definida de manera clara y precisa.

2. Con relación a dicha materia, el Convenio no se aplicará:

- a) en el Estado contratante que haya hecho la declaración;
- b) en otros Estado contratantes, cuando en un acuerdo de elección de foro se haya designado a los tribunales o, a uno o más tribunales específicos del Estado que hizo la declaración.

Artículo 22 Declaraciones recíprocas sobre acuerdos no exclusivos de elección de foro

1. Un Estado contratante podrá declarar que sus tribunales reconocerán y ejecutarán las resoluciones dictadas por los tribunales de otro Estado contratante designados en un acuerdo de elección de foro celebrado por dos o más partes que cumpla con los requisitos establecidos por el artículo 3, apartado c), y que designe, con el objeto de conocer de los litigios que hayan surgido o pudieran surgir respecto a una relación jurídica concreta, a un tribunal o a los tribunales de uno o más Estados contratantes (un acuerdo no exclusivo de elección de foro).

2. Cuando el reconocimiento o la ejecución de una resolución dictada en un Estado contratante que ha hecho dicha declaración se solicite en otro Estado contratante que ha hecho la misma declaración, la resolución será reconocida y ejecutada en virtud del presente Convenio si:

- a) el tribunal de origen fue designado en un acuerdo no exclusivo de elección de foro;
- b) no existe una resolución dictada por ningún otro tribunal ante el cual el litigio pudo presentarse, conforme a un acuerdo no exclusivo de elección de foro, ni existe un litigio pendiente entre las mismas partes en algún otro tribunal sobre el mismo objeto y la misma causa; y,
- c) el tribunal de origen fue el primero al que se acudió.

Artículo 23 Interpretación uniforme

A los efectos de la interpretación del presente Convenio se tendrá en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación.

Artículo 24 Revisión del funcionamiento práctico del Convenio

El Secretario General de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado tomará medidas periódicamente para:

- a) examinar el funcionamiento práctico del presente Convenio, incluyendo cualquier declaración; y
- b) examinar la conveniencia de realizar modificaciones a este Convenio.

Artículo 25 Sistemas jurídicos no unificados

1. En relación a un Estado contratante en el que dos o más sistemas jurídicos relativos a las cuestiones reguladas en el presente Convenio se aplican en unidades territoriales diferentes:

- a) cualquier referencia a la ley o al procedimiento de un Estado se interpretará, cuando sea pertinente, como referencia a la ley o al procedimiento en vigor en la unidad territorial pertinente;

- b) cualquier referencia a la residencia en un Estado se interpretará, cuando sea pertinente, como referencia a la residencia en la unidad territorial pertinente;
 - c) cualquier referencia al tribunal o a los tribunales de un Estado se interpretará, cuando sea pertinente, como referencia al tribunal o a los tribunales en la unidad territorial pertinente;
 - d) cualquier referencia a la conexión con un Estado se interpretará, cuando sea pertinente, como conexión con la unidad territorial pertinente.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, un Estado contratante con dos o más unidades territoriales en las que rigen diferentes sistemas jurídicos no estará obligado a aplicar el presente Convenio a situaciones que impliquen únicamente a dichas unidades territoriales.
 3. Un tribunal en una unidad territorial de un Estado contratante con dos o más unidades territoriales en las que rigen diferentes sistemas jurídicos no estará obligado a reconocer o ejecutar una resolución de otro Estado contratante por la sola razón de que la resolución haya sido reconocida o ejecutada en otra unidad territorial del mismo Estado contratante según el presente Convenio.
 4. Este artículo no será de aplicación a una Organización Regional de Integración Económica.

Artículo 26 Relación con otros instrumentos internacionales

1. El presente Convenio se interpretará, en la medida de lo posible, de forma que sea compatible con otros tratados en vigor en los Estados contratantes, hayan sido celebrados antes o después de este Convenio.
2. El presente Convenio no afectará la aplicación por un Estado contratante de un tratado celebrado antes o después de este Convenio, en los casos en que ninguna de las partes sea residente en un Estado contratante que no es Parte del tratado.
3. El presente Convenio no afectará la aplicación por un Estado contratante de un tratado celebrado antes de la entrada en vigor de este Convenio para dicho Estado contratante, si la aplicación de este Convenio es incompatible con las obligaciones de dicho Estado contratante frente a cualquier Estado no contratante. El presente apartado también se aplicará a los tratados que revisen o substituyan un tratado celebrado antes de la entrada en vigor de este Convenio para dicho Estado contratante, salvo en la medida en que la revisión o la substitución originen nuevas incompatibilidades con este Convenio.
4. El presente Convenio no afectará la aplicación por un Estado contratante de un tratado celebrado antes o después de este Convenio, a fin de obtener el reconocimiento o la ejecución de una resolución dictada por un tribunal de un Estado contratante que es igualmente Parte de dicho tratado. Sin embargo, la resolución no será reconocida o ejecutada en grado inferior que en virtud de este Convenio.
5. El presente Convenio no afectará la aplicación por un Estado contratante de un tratado que, en relación con una materia específica, contenga disposiciones relativas a la competencia o el reconocimiento o la ejecución de resoluciones, aunque haya sido celebrado después de este Convenio y aunque todos los Estados involucrados sean Parte de este Convenio. Este apartado será de aplicación únicamente si el Estado contratante ha hecho una declaración con respecto a dicho tratado, en virtud del presente apartado. En caso de que exista tal declaración, los otros Estados contratantes no estarán obligados a aplicar este Convenio a dicha materia específica en la medida de la incompatibilidad, cuando un acuerdo exclusivo de elección de foro designe a los tribunales o uno o más tribunales específicos del Estado contratante que hizo la declaración.
6. El presente Convenio no afectará la aplicación de las normas de una Organización Regional de Integración Económica que sea Parte de este Convenio, adoptadas antes o después de este Convenio:
 - a) cuando ninguna de las partes sea residente en un Estado contratante que no es un Estado miembro de la Organización Regional de Integración Económica;
 - b) en lo que se refiere al reconocimiento o la ejecución de resoluciones entre los Estados miembros de la Organización Regional de Integración Económica.

CAPÍTULO V – CLÁUSULAS FINALES

Artículo 27 Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión

1. El presente Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados.
2. El presente Convenio estará sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados signatarios.

3. El presente Convenio estará abierto a la adhesión de todos los Estados.
4. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, depositario del Convenio.

Artículo 28 Declaraciones con respecto a sistemas jurídicos no unificados

1. Un Estado con dos o más unidades territoriales en las que rigen diferentes sistemas jurídicos con respecto a las materias reguladas por el presente Convenio, podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que el Convenio se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o varias de ellas y podrá, en cualquier momento, modificar esta declaración haciendo otra nueva.
2. Toda declaración de esta naturaleza será notificada al depositario y en ella se indicarán expresamente las unidades territoriales a las que el Convenio será aplicable.
3. En el caso de que un Estado no haga declaración alguna en virtud del presente artículo, el Convenio se aplicará a la totalidad del territorio de dicho Estado.
4. El presente artículo no será aplicable a una Organización Regional de Integración Económica.

Artículo 29 Organizaciones Regionales de Integración Económica

1. Una Organización Regional de Integración Económica constituida únicamente por Estados soberanos y que tenga competencia sobre algunas o todas las materias reguladas por el presente Convenio, podrá igualmente firmar, aceptar, aprobar o adherirse a este Convenio. En tal caso la Organización Regional de Integración Económica tendrá los mismos derechos y obligaciones que un Estado contratante en la medida en que dicha Organización tenga competencia sobre las materias reguladas por este Convenio.
2. En el momento de la firma, aceptación, aprobación o adhesión, la Organización Regional de Integración Económica notificará por escrito al depositario las materias reguladas por el presente Convenio sobre las cuales los Estados miembros han transferido la competencia a dicha Organización. La Organización notificará por escrito al depositario, en breve plazo, cualquier modificación de su competencia especificada en la última notificación que se haga en virtud del presente apartado.
3. Para los efectos de la entrada en vigor del presente Convenio, cualquier instrumento depositado por una Organización Regional de Integración Económica no será considerado salvo que ésta declare, en virtud del artículo 30, que sus Estados miembros no serán Parte de este Convenio.
4. Cualquier referencia en el presente Convenio a un "Estado contratante" o a un "Estado" se aplicará igualmente, cuando sea pertinente, a una Organización Regional de Integración Económica que sea Parte del mismo.

Artículo 30 Adhesión de una Organización Regional de Integración Económica sin sus Estados miembros

1. En el momento de la firma, aceptación, aprobación o adhesión, una Organización Regional de Integración Económica podrá declarar que ejerce competencia para todas las materias reguladas por el presente Convenio y que sus Estados miembros no serán Parte de este Convenio pero estarán obligados por el mismo en virtud de la firma, aceptación, aprobación o adhesión de la Organización.
2. En el caso que una Organización Regional de Integración Económica haga una declaración conforme al apartado 1, cualquier referencia a un "Estado contratante" o a un "Estado" en el presente Convenio se aplicará igualmente, cuando sea pertinente, a los Estados miembros de la Organización.

Artículo 31 Entrada en vigor

1. El presente Convenio entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después del depósito del segundo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, previsto en el artículo 27.
2. En lo sucesivo, el presente Convenio entrará en vigor:
 - a) para cada Estado u Organización Regional de Integración Económica que subsecuentemente ratifique, acepte, apruebe o se adhiera al mismo, el día primero del mes siguiente a la expiración de un periodo de tres meses después del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;

b) para las unidades territoriales a las que se haya hecho extensiva la aplicación del presente Convenio de conformidad con el artículo 28, apartado 1, el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la notificación de la declaración prevista en dicho artículo.

Artículo 32 Declaraciones

1. Las declaraciones previstas en los artículos 19, 20, 21, 22 y 26 podrán hacerse al momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o posteriormente en cualquier momento y, podrán modificarse o retirarse en cualquier momento.
2. Las declaraciones, modificaciones y retiros serán notificados al depositario.
3. Una declaración hecha al momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión surtirá efecto simultáneamente a la entrada en vigor del Convenio para el Estado respectivo.
4. Una declaración hecha ulteriormente, así como cualquier modificación o retiro de una declaración, surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la fecha de recepción de la notificación por el depositario.
5. Una declaración hecha en virtud de los artículos 19, 20, 21 y 26 no será aplicable a los acuerdos exclusivos de elección de foro celebrados antes de que la misma surta efecto.

Artículo 33 Denuncia

1. El presente Convenio podrá denunciarse mediante notificación por escrito al depositario. La denuncia podrá limitarse a ciertas unidades territoriales de un sistema jurídico no unificado a las que se aplique el presente Convenio.
2. La denuncia surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de un periodo de doce meses después de la fecha de recepción de la notificación por el depositario. Cuando en la notificación se establezca un plazo más largo para que la denuncia surta efecto, ésta surtirá efecto al vencer dicho plazo contado desde la fecha en que la notificación haya sido recibida por el depositario.

Artículo 34 Notificaciones por el depositario

El depositario notificará a los Miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, así como a los otros Estados y Organizaciones Regionales de Integración Económica que hayan firmado, ratificado, aceptado, aprobado o se hayan adherido, de conformidad con lo previsto en los artículos 27, 29 y 30, lo siguiente:

- a) las firmas, ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones y adhesiones a que se refieren los artículos 27, 29 y 30;
- b) la fecha en que el presente Convenio entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31;
- c) las notificaciones, declaraciones, modificaciones y retiro de declaraciones previstas en los artículos 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29 y 30;
- d) las denuncias a que se refiere el artículo 33.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Convenio.

Hecho en La Haya, el 30 de junio de 2005, en inglés y francés siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Gobierno del Reino de los Países Bajos y del cual se remitirá por vía diplomática una copia auténtica de la misma a cada uno de los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el momento de celebrarse su Vigésima Sesión, así como a cada uno de los demás Estados que participaron en dicha Sesión.



República de Costa Rica
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

NATALIA CORDOBA ULATE
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

CERTIFICA:

Que la traducción al español del “**CONVENIO SOBRE ACUERDOS DE ELECCIÓN DE FORO**” adoptado en La Haya, el 30 de junio del 2005, realizada por la Profesora Alegría Borrás y el recordado Profesor Julio González Campos, y que ha sido revisada y ajustada en cooperación con la Oficina Permanente, es una traducción recomendada por la Oficina Permanente, misma que se encuentra publicada en el sitio web de la Conferencia de La Haya, www.hcch.net; y consta de 15 folios, la cual corresponde a la totalidad de las piezas que lo componen a la fecha de su expedición; siendo que la transcripción detallada es fiel y exacta del texto original traducido. Se extiende la presente, para los efectos legales correspondientes, San José, a las catorce horas con veinte minutos del cinco de agosto del dos mil veinticinco.

Rige a partir de su publicación

Dado en la sala de Comisión Permanente de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior, el 25 de junio de 2026.

Iztarú Alfaro Guerrero
Diputada

Osvaldo Artavia Carballo
Diputado

Cindy Murillo Artavia
Diputada

Mayuli Ortega Guzmán
Diputada

Juan Manuel Quesada
Diputado

Joselyn Saénz Núñez
Diputada

Andrea Valverde Palavicini
Diputada

Rafael Ángel Vargas Brenes
Diputado

José Miguel Villalobos Umaña
Diputado

